



PAULO MARTÍNEZ

Diputado federal del PAN

@Paulomartinezi

## El Plan B electoral: la revancha del poder

La reforma electoral enviada por el Gobierno federal al Congreso de la Unión vivió un hecho político inédito. El pasado 11 de marzo, la llamada reforma electoral (el denominado Plan A) fue desechada en la Cámara de Diputados. No solo votaron en contra los partidos de oposición. También lo hicieron el Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos del oficialismo. El mensaje político fue claro: ni siquiera dentro de su propio bloque había consenso para cambiar las reglas de la democracia. Lejos de abrir un proceso de diálogo nacional, el gobierno decidió responder con una nueva iniciativa: el llamado Plan B. Una propuesta que, más que una reforma de

fondo, parece una reacción política tras la derrota legislativa.

El nuevo planteamiento abandona los temas centrales que originalmente se planteaban y se concentra ahora en reducir presupuestos a Congresos locales, limitar recursos a Legislaturas estatales y disminuir el número de regidores en los municipios del país.

El argumento es sencillo: combatir privilegios y generar ahorros públicos que, según el propio gobierno, podrían alcanzar hasta 4 mil millones de pesos. Pero detrás de ese discurso aparentemente atractivo se esconde un problema mucho más profundo. Porque lo que esta iniciativa propone, en realidad, es que el poder federal determine desde el centro cómo deben organizarse los congresos locales y los cabildos municipales. Y eso no es una simple medida administra-

tiva. Es una intervención directa en el Federalismo mexicano.

Por eso resulta preocupante que, después de que su reforma electoral fue rechazada, el gobierno decida insistir con una propuesta que pretende rediseñar la vida política de los estados. Pero más grave aún es lo que esta reforma no toca.

México viene de la elección más violenta de su historia reciente. Decenas de candidatos fueron asesinados durante el proceso electoral, hubo amenazas, presiones y regiones donde el crimen organizado influyó en quién podía competir y quién no. Y aun así, la nueva reforma evita tocar el problema más grave que enfrenta nuestra democracia: la infiltración del crimen en las elecciones.

Tampoco se abordan otros problemas del sistema político. No combate las campañas adelantadas que dominan la

política nacional. No fortalece la participación ciudadana en procesos electorales. No corrige la sobrerepresentación en el Congreso, que permite a algunos partidos tener más poder del que obtuvieron en las urnas. Lo que tenemos no es una reforma electoral profunda. Es una reforma política improvisada que surge como respuesta a una derrota.

México sí necesita una reforma electoral. Pero una que enfrente al crimen organizado en campañas. Que garantice piso parejo entre partidos. Que fortalezca a los ciudadanos y a las instituciones. No una reforma que castigue a los estados, evite los problemas reales y pretenda *disfrazar* de austeridad lo que en el fondo es una disputa política. La democracia mexicana merece mucho más que un plan improvisado después de una derrota legislativa.